



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **CINDY JOANA MORALES MONSALVE**
: **COMPAÑÍA DE ASESORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Demandados : **-CASCO S.A.S.-, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA**
: **S.A.S. - CONSINBE S.A.S.-, SERGIO TORRES REATIGA,**
: **MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
Radicado : **05001 31 05 001 2016 01054 01**
Providencia : Sentencia
: Laboral individual – Indemnización por despido sin justa causa,
Temas y Subtemas : reliquidación de prestaciones sociales teniendo en cuenta auxilio
: de alimentación, indemnización moratoria por no pago de
: prestaciones sociales, responsabilidad solidaria del beneficiario-
Decisión : Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia N° : 051

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se condene en forma solidaria a los demandados, a pagar la **indemnización por mora en el pago de prestaciones sociales**, la suma de \$29.260.000 por concepto de **indemnización por despido injusto**, indexación, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que la demandante celebró contrato de trabajo escrito con el Consorcio Maestro C.S.C. el día 5 de junio de 2014, por duración de la obra denominada Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Argelia, para desempeñarse como Ingeniero Residente Socio ambiental; el salario básico fue de \$1.700.000, para viáticos de alimentación y transporte recibió la suma de \$390.000 mensuales; la obra culminó el día 21 de septiembre de 2015; el día 21 de julio de 2014 le fue terminado el contrato de trabajo en forma unilateral sin justa causa, comunicándole días después que se debió a que fue vinculada para reemplazar a quien fungía en propiedad en ese cargo, mientras estuvo de vacaciones; el día 17 de abril de 2015 le fue consignada la suma de \$435.560 en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, por concepto de liquidación de prestaciones sociales sin incluir los viáticos para alimentación y transporte. Expone que la obra fue ejecutada y financiada en virtud de contrato de obra pública celebrado entre la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia y el Consorcio

Maestro C.S.C., siendo beneficiario el Municipio de Argelia. Elevó reclamación ante los mencionados Municipio y Departamento, los días 7 de agosto y 26 de julio de 2016, respectivamente.

Respuesta a la demanda:

El **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** a través de apoderada judicial, admitió lo referente a la reclamación de la demandante, frente a los demás hechos expuso que no le constan. Sostiene que el Consorcio Maestro C.S.C. asumió bajo su absoluta responsabilidad los incumplimientos prestacionales con el personal que contratara. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló en su defensa las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, inexistencia del derecho, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, prescripción, compensación, inexistencia de vínculo contractual, no aplicación de indemnización moratoria, buena fe, terminación de contrato debidamente justificado, genérica.

Por su parte, el **MUNICIPIO DE ARGELIA** mediante apoderado, aceptó lo relacionado con la ejecución del contrato en esa localidad; sobre lo demás expuso que no le consta. Se opuso a las pretensiones formuladas y propuso como excepciones ineptitud de la demanda por cuantía y no haber existido despido por parte del Municipio, cobro de lo no debido.

A su vez, el apoderado de **CASCO S.A.S.**, admitió la celebración del contrato de trabajo con la señora Cindy Joana, informándole en la entrevista de trabajo, que correspondía a un

reemplazo de una licencia no remunerada solicitada por el residente Socio Ambiental Juan Carlos Restrepo Pineda para asistir al mundial de fútbol en Brasil entre junio y julio de 2014; estuvo de acuerdo con el salario aducido, la conformación del consorcio y el contrato de obra pública, explicando que se desarrolló entre el 15 de enero de 2014 y el 15 de diciembre del mismo año; negó que la demandante recibiera viáticos y que lo pactado en otro sí fue un auxilio de alimentación mensual por valor de \$390.000, no destinado al beneficio ni enriquecimiento del empleado; la demora en la consignación las prestaciones sociales se debió a los retrasos en los trámites administrativos de los pagos al Consorcio, con motivo de la no presentación de informes mensuales del área socio ambiental por la demandante, subsanados una vez retornó el señor Juan Carlos Restrepo Pineda. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de la obligación, prescripción, innominada.

El Curador Ad Litem designado por el Juzgado para actuar en representación de **CONSINBE S.A.S. y SERGIO JOSÉ TORRES REATIGA**, admitió los hechos contenidos en los contratos aportados; se opuso a las pretensiones y formuló en defensa las excepciones que denominó cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, compensación, innominada.

Sentencia de Primera Instancia:

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, **declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido e**

inexistencia de las obligaciones demandadas respecto a las pretensiones **de pago de indemnización** por terminación del contrato de trabajo, **reajuste de prestaciones** sociales e **indemnización por falta de pago**; condenó a CASCO S.A.S., CONSINBE S.A.S. y SERGIO TORRES REATIGA como integrantes del CONSORCIO MAESTRO C.S.C., al pago de \$61.684 por concepto de intereses moratorios del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, entre el 21 de julio de 2014 y el 17 de abril de 2015; \$3.995 por indexación sobre vacaciones; condenándolas en Costas, con agencias en derecho en cuantía de \$4.500 en favor de la demandante. Sin Costas a cargo del Municipio de Argelia y del Departamento de Antioquia.

Recursos de Apelación apoderado del demandante:

Solicita se condene al pago de: **indemnización por despido sin justa causa**, toda vez que en la carta de terminación del contrato de trabajo se adujo la finalización de la obra o labor contratada, lo cual no ocurrió sino hasta el día 21 de septiembre de 2015 y no pueden aducirse razones distintas en forma posterior; la **reliquidación de las prestaciones sociales** incluyendo el auxilio por alimentación que percibía en forma periódica y retribuía el servicio, aunque se hubiere pactado que no constituía factor salarial; **indemnización moratoria**, ya que si bien es cierto, transcurrieron más de 24 meses entre la terminación del contrato de trabajo y la presentación de la demanda, desde antes se había presentado la correspondiente reclamación ante la Gobernación de Antioquia, debiéndose mantener la sanción de un día de salario por cada día de retardo; **solidaridad**, ya que la cláusula de indemnidad establecida por las

partes no puede exonerar a los obligados de reconocer los derechos laborales, el Municipio de Argelia fue el beneficiario del contrato celebrado con el Departamento de Antioquia, la labor ejecutada en la construcción de acueducto hace parte del giro ordinario o al menos, no es extraña a su objeto, pues tienen la misión de prestar el servicio de acueducto a la comunidad.

Alegatos de conclusión:

La apoderada del Departamento de Antioquia reiteró argumentos expuestos en el trámite de primera instancia, solicitando se confirme la Sentencia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Conflicto jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a modificar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de indemnización por despido sin justa causa, reliquidación de prestaciones sociales incluyendo auxilio de alimentación como factor salarial, indemnización moratoria consistente en un día de salario por cada día retardo en el pago de las prestaciones sociales; así mismo, si el Municipio de Argelia y el Departamento de Antioquia deben responder en forma solidaria por las obligaciones laborales a favor de la señora Cindy Joana Morales Monsalve.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia, por las siguientes razones:

Se encuentra por fuera de discusión en esta Segunda Instancia, que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física – Gerencia de Servicios Públicos y el Consorcio Maestro CSC (CASCO S.A.S. 50%, CONSINBE S.A.S. 25% y SERGIO TORRES RETIGA 25%), suscribieron el 27 de diciembre de 2013, el contrato de obra No 2013-OO-37-0033, cuyo objeto era “*Construcción del plan maestro de acueducto de la zona urbana del Municipio de Argelia, primera etapa*”, con plazo de cuatro (4) meses, varias prórrogas y un plazo final de once (11) meses, con acta de inicio el 15 de enero de 2014 (fls 84 a 93). La demandante Cindy Joana Morales Monsalve y el Consorcio Maestro CSC, celebraron un **contrato de trabajo** por duración de

la obra o labor contratada denominada *construcción de obras de los planes maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio de Argelia, Departamento de Antioquia, en el marco de las inversiones en el PAP-DA*; el lugar de ejecución fue el Municipio de Argelia – Antioquia, el salario pactado \$1.700.000, con fecha de inicio de labores el día 5 de junio de 2014 (fls 25 y 26); el Consorcio Maestro CSC dio por terminado el contrato de trabajo mediante carta de fecha 21 de julio de 2014, por finalización de la obra para la cual fue contratada (fl 189). Mediante comunicación del 21 de abril de 2015, la Líder de Gestión Humana del Consorcio Maestro CSC, informó a la demandante sobre la **consignación de la liquidación de prestaciones sociales por valor de \$435.560** el día 17 del mismo mes y año, en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín (fl 31 y 191).

Sobre los temas objeto de apelación tenemos que:

1. Acerca de la procedencia de indemnización por despido sin justa causa, afirma el apoderado de la demandante que *en la carta de terminación del contrato de trabajo se adujo la finalización de la obra o labor contratada, lo cual no ocurrió sino hasta el día 21 de septiembre de 2015 y no pueden aducirse razones distintas en forma posterior.*

Al respecto, la Juez de Primera Instancia explicó que la terminación del contrato de trabajo de la demandante tuvo lugar antes del vencimiento del periodo de prueba, sin que en esos casos se exija al empleador entregar explicaciones sobre la decisión.

Lo anterior, con fundamento en lo estipulado en el numeral 1° del artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual, el periodo de prueba puede darse por terminado en forma unilateral, en cualquier momento y sin previo aviso.

Al respecto, **encuentra esta Sala de Decisión Laboral que, en efecto, en la cláusula tercera del contrato de trabajo suscrito, las partes acordaron sujetarlo a un periodo de prueba, sin que fuera superior a dos (2) meses contados desde la fecha de inicio, consagrando en forma expresa que durante ese plazo “...cualquiera de las partes podrá darlo por terminado unilateralmente sin previo aviso y sin lugar al pago de indemnización...”** (fl 25).

Sobre este tema, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia **SL4103-2018**, señaló que, en una relación laboral, las partes están facultadas para estipular un lapso en el cual puedan cerciorarse de las ventajas o inconvenientes que pueda acarrear el vínculo y siempre que no se evidencie un vicio en el consentimiento, es posible la terminación sin previo aviso y sin invocar una motivación particular; reiterando lo dicho en Sentencia del 3 de septiembre de 1980 con Radicación 7419, respecto a que **ejercer el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo conforme al pacto de periodo de prueba, no implica un despido injusto**; veamos:

*“...Enseña el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo que **el periodo de prueba** es la fase inicial del contrato de trabajo y que **tiene por objeto que tanto el patrono como el empleado puedan cerciorarse de las recíprocas ventajas o inconvenientes que traiga para ellos el vínculo laboral que han contraído**. El artículo 77 exige que este periodo se pacte por escrito. Y el artículo 3° del Decreto Legislativo 617 de 1954, que modificó el 80 del Código, estatuye que **durante el periodo de prueba el contrato puede darse por terminado en cualquier momento sin aviso previo y, obviamente, sin necesidad de invocar motivo concreto para hacerlo**.*

*Ello significa que si en un contrato de trabajo se estipula de modo regular el período de prueba y **si no se alega y demuestra que el consentimiento** de alguna de las partes, respaldado con su firma en el contrato, **está viciado por error, fuerza o dolo, dicho pacto debe tener todas sus consecuencias jurídicas**, sin que le sea dable al intérprete de aquellas normas descalificarlo con argumentos o reflexiones que no surjan de su prístino texto, porque al hacerlo viene a quebrantar los preceptos por errónea exégesis. **Ejercer el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo que surge del pacto de período de prueba no implica entonces despido injusto del empleado.***

Quebranta pues la sentencia impugnada los artículos 76 y 80 del Código Sustantivo y, además, aplica en forma indebida el artículo 8° del Decreto Legislativo 2351 de 1965, como lo asevera el recurrente...” (Negritas fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto, luego de la terminación del contrato de trabajo no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos, como alega el apoderado de la demandante y lo contempla el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo; también lo es que, en el asunto bajo análisis, la realidad que muestran las pruebas allegas al proceso es que esa determinación, de dar por terminado el contrato de trabajo, la adoptó el empleador dentro del periodo de prueba pactado, lo que es válido y legal siempre que no exista vicio en el consentimiento al suscribir ese acuerdo, lo cual no fue alegado siquiera por la demandante; por tanto, la decisión del empleador demandado se ajusta a lo acordado previamente por las partes y en ese escenario, está exento incluso de motivar su decisión, no habiendo lugar a indemnización por despido sin justa causa, tal como explicó la Juez de Primera Instancia; siendo procedente **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia en este aspecto.

2. En cuanto a que se reliquiden las prestaciones sociales incluyendo el auxilio por alimentación que se

percibía en forma periódica y retribuía el servicio; no prospera el recurso.

En primer lugar, porque **se trata de pretensión no incluida en la demanda**, toda vez que lo solicitado fue: 3.1. indemnización por mora en el pago de prestaciones sociales, 3.2. indemnización por despido injusto, 3.3. indexación. Ahora bien, si se entendiera que hay lugar a su estudio, por haberse abordado el tema por parte de la Juez de Primera Instancia; tampoco se encuentra procedente acceder a lo pedido, puesto que no basta con la periodicidad en el pago del auxilio de alimentación para que tenga el carácter de salario, retribuyendo la prestación del servicio.

Está probado que las partes suscribieron **otro sí al contrato de trabajo**, consagrando lo siguiente: “...Primera: Las partes de común acuerdo expresamente han determinado que **con la finalidad de que EL EMPLEADO desempeñe a cabalidad sus funciones y no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, recibirá: un auxilio de manutención**, mensualmente por un valor de \$390.000 trescientos noventa mil pesos de acuerdo a los parámetros administrativos del EMPLEADOR. SEGUNDA: Los pagos descritos en la cláusula primera se pactaron y configuraron como no constitutivos de salario, y en consecuencia con fundamento en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, no se tomarán en cuenta como base para liquidar prestaciones, ni para el pago de aportes parafiscales...” (fl 27).

Sobre el tema, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo establece que no constituye salario lo que recibe el trabajador “...en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones,

como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes...”.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en **Sentencia SL435-2019**, recordó que la periodicidad o regularidad del pago, por sí solo no implica que el beneficio tenga el carácter de salario, siendo además necesario que su naturaleza sea la de **retribuir directamente el servicio**, es decir, “...que tiene su fuente «próxima o inmediata» en el servicio personal prestado por el trabajador, esto es, depende directamente de lo que «haga o deje de hacer» ...”.

En este caso, se afirmó desde la demanda que la obra para la cual fue contratada la señora Cindy Joana, fue ejecutada en el Municipio de Argelia – Antioquia y así se corrobora con la prueba documental aportada; recibiendo por *viáticos* de **alimentación y transporte** la suma de \$390.000 mensuales.

Conforme a la cláusula citada se observa que lo pactado fue un *auxilio de manutención* por ese valor para desempeñar sus funciones; según el formato de Gestión Humana con el logo de CASCO S.A.S. que contiene información personal de la trabajadora, se observa que su lugar de residencia estaba ubicado en el Barrio Buenos Aires de Medellín, siendo lógico concluir que para el desempeño de sus funciones como Residente Socio Ambiental, debiera desplazarse hasta el Municipio de Argelia, ubicado en la subregión oriente de Antioquia, aproximadamente a 148 kilómetros de distancia de la ciudad de Medellín, lo que respalda los pagos realizados en forma mensual por concepto de *auxilio de manutención*; siendo coherente y razonable la conclusión de la Juez de Primera Instancia, **respecto a que esas**

sumas no fueron entregadas para enriquecer el patrimonio de la demandante, ni para retribuir los servicios, sino para que pudiera ejercer a cabalidad sus funciones. Por tanto, se **confirmará** la Sentencia recurrida frente a este tema.

3. Se solicita el pago de indemnización moratoria, *ya que si bien es cierto, transcurrieron más de 24 meses entre la terminación del contrato de trabajo y la presentación de la demanda, desde antes se había presentado la reclamación ante la Gobernación de Antioquia, debiéndose mantener la sanción de un día de salario por cada día de retardo; no habiendo lugar a lo pretendido, toda vez que, conforme a jurisprudencia reiterada del Órgano de Cierre de la especialidad laboral, lo que se exige en estos casos es la presentación de la demanda laboral antes del cumplimiento del término de los 24 meses y no la reclamación administrativa; por lo que, al haberse radicado la demanda el día 5 de septiembre de 2016, estaba más que superado el término de 24 meses, contado desde la terminación del contrato de trabajo el día 21 de julio de 2014, tal como explicó la a quo.*

En efecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en **Sentencias SL2805 de 2020 Radicado 76988** reiterando Radicado 46385 del 25 de julio de 2012 y Radicado 38177 del 3 de mayo de 2011, **SL3274 de 2018 Radicado 70066**, entre otras; indicó que **la presentación de la demanda por fuera del término de los veinticuatro (24) meses, implica para el trabajador la pérdida del derecho a la indemnización moratoria y sólo le asiste el derecho a los intereses moratorios;** en los siguientes términos:

“... Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al

fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera... (Negritas fuera de texto).

De acuerdo a lo explicado, se **confirmará** también en este aspecto la Sentencia recurrida.

4. Finalmente, solicita el apoderado se condene al Municipio de Argelia y al Departamento de Antioquia, a responder en forma solidaria por las obligaciones laborales reconocidas en la Sentencia en favor de la demandante; ya que *la cláusula de indemnidad establecida por las partes no puede exonerar a los obligados de reconocer los derechos laborales, el Municipio de Argelia fue el beneficiario del contrato celebrado con el Departamento de Antioquia, la labor ejecutada en la construcción del acueducto hace parte del giro ordinario o al menos, no es extraña a su objeto, pues tienen la misión de prestar el servicio de acueducto a la comunidad.*

La Juez de Primera Instancia explicó que las citadas entidades, no debían responder en forma solidaria por las condenas impuestas, atendiendo a la cláusula de indemnidad incluida en el contrato de obra No 2013-OO-37-0033, donde se establece: “...INDEMNIDAD: Será obligación del contratista mantener libre al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes...” (fl 130 vuelto).

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral que, conforme al artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, no produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca el mínimo

de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores; por lo que, en el evento de estar demostradas las condiciones para declarar la responsabilidad solidaria por parte del beneficiario o dueño de la obra, en principio, podría decirse que no queda relevada de tal obligación por haberse pactado una cláusula de *indemnidad*, contraviniendo las disposiciones legales de índole laboral.

Debe recordarse que, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra la solidaridad entre el beneficiario de la obra y el contratista independiente, respecto de las obligaciones laborales de los trabajadores de éste, a menos que la labor contratada corresponda a labores extrañas o ajenas a las actividades normales de su empresa o negocio.

Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL4873-2021, reiterando SL14692-2017 y SL del 2 de junio de 2009 Radicación 33082 indicó: “...*tampoco erró el colegiado al señalar, que para imponer aquella garantía legal al dueño o beneficiario de la obra, **debía verificarse**, además de los objetos sociales de la contratista y la beneficiaria de la obra, **la relación o conexión con la actividad encomendada al contratista independiente e incluso las características y causalidad de la actividad específica desarrollada por el trabajador**, en razón a que, en ese sentido, lo ha orientado la Corporación...*”. Así mismo, resaltó que “... **para que surja la responsabilidad solidaria del beneficiario no es suficiente con que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, sino que aquella constituya «[...] una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social...**”, citando a su vez SL14692-2017 (Negritas fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, no se trata de establecer un mero paralelo o una simple comparación entre los objetos sociales del beneficiario o dueño de la obra y el contratista.

Siendo pertinente recordar que, conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el Juez no está sujeto a la tarifa legal de pruebas y forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal de las partes.

Y de acuerdo a la valoración en conjunto de la prueba obrante en el expediente, **esta Sala de Decisión Laboral no encuentra procedente imponer responsabilidad solidaria a cargo del Municipio de Argelia**, solo a partir del hecho de haberse ejecutado en su territorio el contrato de obra de construcción del acueducto, sin haber intervenido siquiera -al menos no está demostrado en el proceso-, en la suscripción del contrato celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física – Gerencia de Servicios Públicos y el Consorcio Maestro CSC; de hecho, allí se indica que la apropiación presupuestal se efectuó con cargo a la imputación soportada en el Fondo Plan Departamental de Aguas, Fondo de Inversión del Agua, Sistema General de Participación (fl 86 vuelto); no siendo razón suficiente para declarar la solidaridad en el caso concreto, que los habitantes del Municipio percibieran los beneficios de una nueva red de acueducto, sin que el ente municipal interviniera en esa contratación.

Ahora bien, tampoco es viable deducir en forma automática la responsabilidad solidaria del Departamento de Antioquia, por ser el contratante de la obra, sin conocerse siquiera cuál fue la labor concreta ejecutada por la demandante, solo se sabe que fue vinculada para el empleo denominado *residente socio ambiental* (fl 25), sin que exista constancia respecto a la labor encomendada, las funciones desempeñadas o *la actividad específica desarrollada por el trabajador*, en el marco de ejecución del contrato de obra “*Construcción del plan maestro de acueducto de la zona urbana del Municipio de Argelia, primera etapa*” y en tal sentido, al no estar probada su labor o actividad concreta, no puede afirmarse válidamente que su oficio era inherente al objeto de la entidad territorial.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la decisión de Primera Instancia en todas sus partes, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en costas en Segunda Instancia a cargo de la demandante, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose como agencias en derecho la suma de \$300.000 en favor de las codemandadas **MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** y **CASCO S.A.S.** a razón de \$100.000 para cada una; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del

Proceso y el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; conforme a lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se condena en **Costas** en esta Segunda Instancia a cargo de la demandante Cindy Joana Morales Monsalve, fijándose como agencias en derecho la suma de \$300.000 en favor de las codemandadas **MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** y **CASCO S.A.S.** a razón de \$100.000 para cada una; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL
HACE SABER:

**Que se ha proferido sentencia en el proceso
que a continuación se relaciona:**

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: CINDY JOANA MORALES MONSALVE
	: COMPAÑÍA DE ASESORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Demandados	: -CASCO S.A.S.-, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. - CON SINBE S.A.S.-, SERGIO TORRES REATIGA, MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Radicado	: 05001 31 05 001 2016 01054 01
Providencia	: Sentencia
	: Laboral individual – Indemnización por despido sin justa causa, reliquidación de prestaciones sociales teniendo en cuenta auxilio de alimentación, indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales, responsabilidad solidaria del beneficiario-
Temas y Subtemas	
Decisión	: Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia N°	: 051

FECHA SENTENCIA: 17 de marzo de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy miércoles 22 de marzo de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy
miércoles 22 de marzo de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario